

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
PALACIO LEGISLATIVO
P R E S E N T E.

Los suscritos **CC. JESÚS ANGÉLICA DÍAZ QUIÑÓNEZ Y VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO**; la primera, Diputada del Partido Sinaloense de esta LXIII Legislatura, y el último, ciudadano sinaloense, en ejercicio de las facultades que nos confieren el artículo 45, fracciones I y V, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y los artículos 18 fracción I, 135 y 136 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, nos permitimos presentar ante esta Soberanía la siguiente:

**Iniciativa de proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Indulto del
Estado de Sinaloa**

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETO

I. En atención a lo mandatado por el artículo 45, fracciones I y V, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que señala que los Diputados en la Entidad y los ciudadanos sinaloenses, estamos legitimados para presentar iniciativas de Ley, con tal carácter así lo estamos ejerciendo;

II. Que es función de esa Honorable Sexagésima Tercera Legislatura, revisar el orden jurídico para el Estado de Sinaloa, por lo que en atención a ello, nos estamos presentando formalmente con este documento; y

III. Que el **OBJETO** de la presente iniciativa, es **expedir** la Ley de Indulto del Estado, para que el Ejecutivo del estado en uso de sus facultades constitucionales, les conceda la libertad a ciertas personas que se encuentran recluidas en los Centros Penitenciarios de la Entidad.

Por lo tanto y en tal virtud de lo anterior, resulta necesario proponer esta Iniciativa de Ley, y someter a su respetable consideración bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho internacional de los derechos humanos establece garantías específicas en favor de las personas privadas de libertad; en particular, respecto de personas de edad avanzada privadas de la libertad, a quienes los derechos y garantías generales les resultan aplicables en la medida en que sean compatibles con la pena privativa de libertad. La Convención de Derechos Humanos de las Personas Mayores contiene disposiciones específicas respecto de estas personas, incluyendo cuidados especiales a su salud, y la promoción de medidas alternativas a la privación de la libertad.

La privación de la libertad es un mecanismo de represión penal que está plenamente autorizado por el derecho internacional de los derechos humanos. De hecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), además de consagrar el derecho al debido proceso y los principios básicos del derecho penal liberal, autoriza a la ley a limitar las libertades de las personas, para satisfacer las exigencias de la moral, el orden público y el bienestar general en una sociedad democrática (art. 11 y 29.b). Es más, el castigo penal de ciertas conductas puede llegar a ser una obligación internacional para el Estado.

Ahora bien, la privación de libertad debe estar siempre limitada por el respeto a la dignidad humana, que es el pilar fundamental de todo el sistema universal de derechos humanos. Que en este sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado internacional vigente y ratificado por el Estado Mexicano, establece en su artículo 10 el derecho de toda persona privada de libertad a ser “tratada humanamente y con respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce el derecho genérico al respeto a la dignidad de toda persona (art. 11). Asimismo, al reconocer el derecho a la integridad personal, regula diversos aspectos de la pena y privación de la libertad, a manera de garantizar dicha integridad (art. 5). Que en síntesis, se puede sostener que los principales instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes, aceptan la privación de libertad como castigo penal, siempre que ésta se enmarque en el respecto a la dignidad humana.

El derecho internacional de los derechos humanos exige que el Estado proteja y garantice los derechos de los privados de la libertad, en particular su integridad física, síquica y salud, cuando se trate de integrantes de una comunidad indígena, sean adultos mayores, padezcan alguna enfermedad en fase terminal, o hayan realizado acciones destacadas en beneficio de la comunidad, incluso por razones humanitarias o sociales.

El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo tercero mandata que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En ese sentido, todas las autoridades están obligadas a respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos, por ello, cuando se violente alguno de estos para someter a las personas, comunidades o pueblos, esta Soberanía está obligada por el mandato popular que se ha depositado en la misma a intervenir en los casos en que la Ley lo permita para lograr una efectiva y real justicia.

Ahora bien, es incierto el origen del indulto como figura jurídica pero parece existir un consenso en la doctrina que indica que su nacimiento atiende a la facultad de los reyes, soberanos de la tierra y de las leyes divinas, en quienes se depositaba

la soberanía y el poder para hacer y derogar las leyes, así como para castigar los delitos y también para perdonarlos.

Lo cierto es que el indulto ha estado presente en la legislación nacional moderna desde la Constitución de 1857, la cual establecía en su artículo 85, fracción XV, que el Presidente tenía la facultad de “conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de la competencia de los tribunales federales.”

El artículo 89, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, reprodujo tal disposición ampliando tal facultad para otorgarla a los sentenciados por delitos del orden común del Distrito Federal.

En ese sentido, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 65 fracción XVIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, entre las facultades del Gobernador del Estado se encuentran el conceder indulto, dicha fracción a la letra dice:

Artículo 65. Son facultades y obligaciones del Gobernador Constitucional del Estado, las siguientes:

(...)

XVIII. Cuidar de que las sentencias ejecutoriadas dictadas por los Tribunales del Estado en materia penal, sean debidamente cumplidas; conceder indultos por delitos del orden común, así como proveer el cumplimiento del reconocimiento de inocencia de reos sentenciados, en los casos que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado haya resuelto fundados.

Aunque el indulto se encuentra estipulado en la Constitución Local, aún su texto normativo resulta insuficiente en establecer las particularidades de los casos en que será procedente tal absolución, por lo que es necesario regular este privilegio, establecer claramente los requisitos para su procedencia y fijar excepciones, más allá de las circunstancias que habilitan a solicitar el beneficio, es por esa razón la

pertinencia de esta propuesta de iniciativa del PAS que busca expedir la Ley de Indulto del Estado, con la finalidad que el Ejecutivo Estatal en uso de sus facultades constitucionales, les conceda la libertad a ciertas personas que se encuentran reclusas en los Centros Penitenciarios de la Entidad.

Los suscritos reconocemos que se ha constatado en diversos casos, que por extrema pobreza, condiciones lingüísticas, educativas, o por estar en situación de vulnerabilidad, muchas personas son condenadas por el sistema judicial federal o local, sin contar con una adecuada defensa o violándose su derecho al debido proceso.

Esta población penitenciaria muchas veces no cuenta con la asesoría necesaria para impugnar las sentencias en su contra o, cuando lo hacen, debido a las graves violaciones del debido proceso en la primera instancia y careciendo de una adecuada defensa en instancias subsecuentes, no les es posible demostrar su inocencia por las vías establecidas en la legislación actual, lo que los condena a cumplir una sentencia que muchas veces fue dictada en franca violación de los derechos humanos y procesales.

Es por ello, que esta propuesta plantea en su texto normativo que los beneficios contenidos en esta Ley serán aplicables única y exclusivamente a aquellas personas que hayan cometido delitos del orden común en el Estado y además que el sentenciado se encuentre interno en un centro de reclusión deberá cumplir los siguientes requisitos:

- No haber sido sentenciado anteriormente por delitos del fuero común ni del fuero federal.
- Que el delito por el que haya sido condenado no se encuentre exceptuado en los términos del artículo 5 de esta Ley.

- No encontrarse sustraído a la acción de la justicia.

Asimismo, proponemos en la Ley que el Ejecutivo del Estado podrá otorgar los siguientes beneficios:

- El Indulto por Gracia, a aquellas personas que hubieran llevado a cabo algún acto de gran trascendencia de beneficio colectivo.
- El Indulto por Alfabetización, a aquellos internos que hayan enseñado a leer y escribir a cualquier persona iletrada, cuando la sanción privativa de libertad sea menor a 5 años.

En el PAS, sabemos que promover en la sociedad sinaloense la cultura del indulto como una segunda oportunidad, es contribuir a la libertad y acceso a la justicia de personas criminalizadas injustamente, pues criminalizar sobre todo al más pobre, al más humilde, la persona que no tiene recursos, la que no tiene cultura, es profundamente injusto, discriminatorio e inconstitucional.

Por lo que estando facultado el Honorable Congreso del Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y Decretos para la mejor administración del Estado, planeando su desarrollo económico y social, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y en su Ley Orgánica, se emite el siguiente:

DECRETO NÚMERO. _____

ARTÍCULO ÚNICO. Se **EXPIDE** la **Ley de Indulto del Estado de Sinaloa**, para quedar como sigue:

LEY DE INDULTO DEL ESTADO DE SINALOA

Artículo 1. El Ejecutivo del Estado, de manera excepcional en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción XVIII del artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, concederá indulto a las personas sentenciadas en los términos de esta Ley.

Artículo 2. El indulto a que se refiere esta Ley, es una gracia, no constituye derecho en favor de persona alguna; y para concederse, se tomará en consideración el dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el que se demuestre que la persona sentenciada, no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas.

Artículo 3. Los beneficios contenidos en la presente Ley serán aplicables única y exclusivamente a aquellas personas que hayan cometido delitos del orden común en el Estado y que el sentenciado haya agotado todos los recursos legales locales y nacionales, cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada. Además que el sentenciado se encuentre interno en un centro de reclusión sujeto a la jurisdicción del Estado y que cumpla con los siguientes requisitos:

I. No haber sido sentenciado anteriormente por delitos del fuero común ni del fuero federal;

II. Que el delito por el que haya sido condenado no se encuentre exceptuado en los términos del artículo 5 de esta Ley; y

III. No encontrarse sustraído a la acción de la justicia.

Artículo 4. El Ejecutivo del Estado podrá otorgar los siguientes beneficios:

I. El Indulto por Gracia, a aquellas personas que hubieran llevado a cabo algún acto de gran trascendencia de beneficio colectivo, o que hayan arriesgado o

puesto en peligro su vida para proteger los bienes, la salud o la vida de otras personas o que por circunstancias especiales del sentenciado así se requiera, o bien por otras causas debidamente justificadas que hagan necesaria la aplicación del beneficio de que se trata, por elemental justicia; y

II. El Indulto por Alfabetización, a aquellos internos que hayan enseñado a leer y escribir a cualquier persona iletrada, cuando la sanción privativa de libertad sea menor a 5 años.

A manera de excepción, el beneficio al que se refiere la fracción I podrá aplicarse a internos no comprendidos dentro de los supuestos del artículo 3 de esta Ley cuando a juicio del Ejecutivo del Estado el caso, así lo requiera.

Artículo 5. Se exceptúan de los beneficios de la presente Ley, a los sentenciados por la comisión de alguno de los siguientes delitos: violación, delitos en el ámbito de la procuración de justicia, los cometidos en el ámbito de la administración de justicia, contra la libertad y seguridad personal, homicidio calificado, robo con agravantes, robo de ganado, secuestro, tortura, retención, sustracción de menores o incapaces con fines de corrupción o tráfico de órganos, trata de personas, desaparición forzada de personas, y todos los delitos de carácter imprescriptible; y a quienes hayan participado en riñas colectivas o intentos de motín o de fuga durante su fase de internamiento.

Artículo 6. El indulto lo concederá el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de oficio o a petición del sentenciado, tomando en consideración la opinión del Fiscal General del Estado y del Director General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

El Ejecutivo estudiará la solicitud, así como la documentación anexa, que deberá consistir en copia certificada de la sentencia, del auto que la declara ejecutoriada, del oficio en virtud del cual el Poder Judicial pone a disposición del Poder

Ejecutivo al sentenciado solicitante, el certificado de antecedentes penales que haga constar que no existe registro de antecedentes y el Certificado del Centro Penitenciario que corresponda, sobre la conducta del interno, incluyendo su tiempo recluso y su tiempo trabajado en favor de la comunidad.

En caso de que el sentenciado pertenezca a una comunidad indígena, se requerirá la constancia emitida por la autoridad tradicional de la comunidad de donde pertenezca.

Artículo 7. En todos los casos, para conceder el indulto, el Titular del Ejecutivo deberá tomar en cuenta las circunstancias personales de las víctimas u ofendidos, las particularidades del sentenciado, su peligrosidad y situación socio-económica, la gravedad del delito; también se tomarán en cuenta la individualización de la persona según la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional y el impacto del hecho ilícito en la comunidad donde fue realizado.

Asimismo, cuando el sentenciado pertenezca a una comunidad indígena, se tomarán en cuenta sus tradiciones, cultura y demás circunstancias inherentes a su etnia.

Artículo 8. Para que el sentenciado pueda gozar de los beneficios que otorga la presente Ley, deberá haber cubierto previamente la reparación del daño causado por el delito. Esta Ley en ningún caso exime al sentenciado de la obligación de reparar el daño, quedando a salvo los derechos de los interesados, para ejercerlos en la forma y términos que las leyes del Estado lo establezcan, cuando a juicio del Ejecutivo demuestre fehacientemente su insolvencia económica, caso en el cual la reparación del daño no será requisito indispensable para la aplicación de este beneficio.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan al presente Decreto.

A T E N T A M E N T E

Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a 02 de junio de 2020.

POR EL PARTIDO SINALOENSE



DIP. JESÚS ANGÉLICA DÍAZ QUIÑÓNEZ

CIUDADANO SINALOENSE



C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO